

primer plano

análisis

“El proceso de la Cumbre Agraria está conectado con Cuba”.

Francisco de Roux

Las lecciones detrás de una protesta que completa dos semanas

El paro agrario e indígena, que comenzó el 30 de mayo, es una prueba de fuego para el Gobierno, de cara a las demandas que traerá el posconflicto.

Orlando Restrepo y Bernardo Bejarano
Redacción Domingo

Con una actitud mucho más dialogante que la de hace tres años, el gobierno de Juan Manuel Santos enfrenta desde el 30 de mayo su segundo gran paro nacional.

Campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes, reunidas en la denominada Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular (de la que hacen parte la Onic, Marcha Patriótica y otras 11 organizaciones) se han concentrado en al menos 40 puntos del país y han bloqueado vías neurálgicas.

La razón que esgrimen es el incumplimiento de las promesas que les hizo el Gobierno con el fin de conjurar el paro agrario del 2013, que tras varios días de protestas en las carreteras desembocó en una ola de vandalismo urbano y en la militarización de Bogotá.

Esta vez, los hechos más tensos se han registrado en la carretera Panamericana, específicamente en el tramo que comunica a Cali y Popayán, donde dos indígenas perdieron la vida en circunstancias que aún son materia de investigación.

El bloqueo de la vía, que se levantó por 36 horas (se cumplían anoche), generó desabastecimiento en el suroccidente (ver artículo en la página 3). Durante el desbloqueo se dio prioridad al paso de ambulancias y al transporte de víveres y combustible. Según el mayor Germán Sáenz, de la Policía de Carreteras, se tenía previsto que se movilizaran 7.000 vehículos.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el paro ha involucrado a cerca de 65.500 manifestantes y ha afectado a más de 3,6 millones de personas en el país. En sus registros figuran tres personas muertas, dos en Cauca y una en Buenaventura (Valle), y 130 detenidas. Al cierre de esta edición persistía la escasez de gasolina, alimentos e insumos médicos en Arauca, Risaralda, Cauca y Nariño.

Como si esto fuera poco, a la Cumbre Agraria se sumaron, el domingo pasado, representantes del gremio del transporte terrestre, que reclaman por el incumplimiento de lo pactado con el Gobierno para levantar el paro del año pasado (ver nota anexa). A diferencia de lo que



Indígenas bloquearon la vía Panamericana, entre Mondomo y Pescador, en el Cauca. Juan B. Díaz / EL TIEMPO

ocurrió en el 2013 –cuando el presidente Santos pronunció la infortunada frase “ese tal paro agrario no existe”–, esta vez el Ejecutivo ha atendido la emergencia desde el comienzo y ha manifestado su disposición al diálogo. Pero dejando en claro que no renuncia al uso de la fuerza como último recurso para levantar los bloqueos.

Sin embargo, hay varios factores e intereses que dificultan la negociación. En primer lugar, la gran variedad de actores y peticiones

hace que alcanzar un acuerdo sea un proceso arduo y que lo pactado sobre la mesa suela desconocerse cuando se transmite a las bases.

El jueves, Giovanni Yule, de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca (Acín), admitió la división interna, pero culpó de ella al Gobierno: “(los funcionarios) van a los departamentos, sientan organizaciones y las aíslan para negociar con cada una por aparte”.

Tampoco ayuda la presunta infiltración de la guerrilla (Eln), denunciada por el Mi-

nistro de Defensa e investigada por la Fiscalía, algo prácticamente inevitable en un país donde el conflicto armado no ha cesado. Por ejemplo, en Arauquita, Fortul y Saravena (Arauca), el comercio cerró por una supuesta orden de los ‘elenos’, que nadie confirma pero todos acatan.

Así mismo, la polarización política que sufre Colombia no solo profundiza la tendencia de algunos sectores a criminalizar la protesta, sino que presiona al Gobierno. Cabe recordar que esta semana el procurador general, Alejan-

dro Ordóñez, le envió al presidente Santos una carta en la que cuestiona “la ineficacia del Gobierno” para enfrentar el bloqueo de la Panamericana. “Una negociación indefinida con quienes violan la ley y afectan los derechos de los ciudadanos, con el disfraz de la protesta, estimula nuevos brotes de violencia”, escribió.

Pero quizás el mayor reto para alcanzar un acuerdo duradero es el calado de las aspiraciones de quienes protestan. Más que subsidios o proyectos específicos, lo que están poniendo sobre la mesa es todo un replanteamiento de la vida rural del país, que abarca desde el ordenamiento territorial hasta la minería, pasando por los cultivos ilícitos (ver entrevista abajo).

“Aunque en lo inmediato el tema que más molesta es el incumplimiento de lo concertado con el sector agrario, el factor de fondo de la protesta es la serie de problemas estructurales e históricos que tienen las regiones y que el Estado no atiende suficientemente”, afirma Mauricio Archila, una de las personas que más han investigado la protesta social en Colombia.

Según él, el proceso de paz de La Habana tiene mucho que ver con lo que está pasando. “Los diálogos con las Farc no solo han hecho visibles temas como el agrario, sino que han hecho que la gente quiera presentar su posición”, explica.

En eso coincide el padre Francisco de Roux, que ha estado presente en las negociaciones como garante, junto con representantes de la ONU y del Congreso, entre otros. “El proceso de la Cumbre (Agraria) tiene sentido en la medida en que está vinculado con las conversaciones de La Habana y las ulteriores conversaciones con el Eln”, opina.

PASA A LA PÁGINA 4

Se detuvo el 15 % del transporte

Redacción Economía

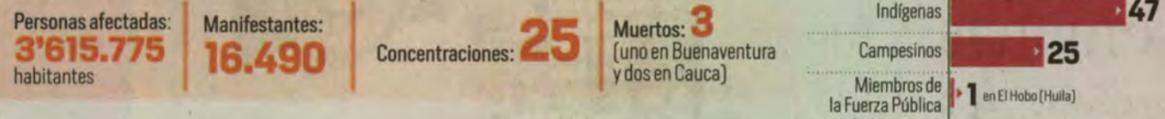
Con un pliego de 14 puntos, sectores liderados por la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) y la Asociación del Transporte de Carga (ATC) se sumaron a un cese de actividades. La Asociación Nacional de Empresas Transportadoras de Carga por Carretera (Asecarga) estima que de las 64.700 tractomulas que hay en el mercado, de un total de 373.400 vehículos de carga, se ha afectado un 15 por ciento es decir 9.705.

Cálculos de Asecarga revelan que en cuatro días de paro, desde el 7 de junio hasta el viernes, las pérdidas alcanzan los 57.648 millones de pesos, de los cuales 33.968 corresponden a fletes dejados de recibir.

Aunque ni Gobierno ni transportadores han revelado detalles del pliego, Ricardo Virviescas, presidente de la Cámara Nacional del Transporte (CNT), sostiene que son 14 puntos en los que piden: vivienda, pensión y seguridad social de los conductores, ponerle coto a los carros mal matriculados, el respeto a los costos mínimos de fletes según el Sistema de Costos Eficientes (Sice), racionalizar los cobros de los peajes y aplicar el fallo de la Corte Constitucional en cuanto a los precios de los combustibles, que declaró inexecutable el ahorro que se hacía para el Fondo de Estabilización. Y aunque al cabo de las tres reuniones, el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, señaló que uno de los puntos de avance fue el cumplimiento de los fletes. Al cierre de esta edición no se había realizado la reunión para retomar conversaciones y lo más probable, según fuentes del Ministerio de Transporte, es que se lleve a cabo mañana o el martes.

Sectores afectados por concentraciones

Fuente: Defensoría del Pueblo, Policía de carreteras y corresponsales de EL TIEMPO



Arauca, Risaralda, Cauca y Nariño, con escasez de gasolina, alimentos básicos, drogas y oxígeno para hospitales. Pero con el levantamiento del bloqueo se está normalizando.



‘Las peticiones se complementan con agenda de Cuba’: vocero del paro

César Jerez, vocero de la Cumbre Agraria, se refirió a lo que motivó el paro:

¿Qué están pidiendo?

Son ocho puntos que hacen parte de los acuerdos del 2013 y que no se han cumplido. Ahora los presentamos en un Pliego Nacional de la Cumbre Agraria.

Estos puntos son: tierras y ordenamiento territorial, economía propia, minería, cultivos ilícitos, relación campo-ciudad, derechos sociales y paz.

¿Por qué se hace el paro ahora?

El incumplimiento del ciento por ciento de esos ocho puntos del pliego suscitó la convocatoria a

una Minga Nacional y al paro agrario. Estos puntos son un acumulado de los paros agrarios desde el 2013.

El Gobierno solo ha cumplido unos acuerdos de confianza en un 60 por ciento en temas como el Fondo de Promoción de la economía agropecuaria, financiación y ejecución de 30 proyectos de

infraestructura social, una vigencia anual para el Fondo y el fortalecimiento organizativo de la Cumbre. Además, no se ha cumplido lo que respecta a derechos humanos y garantías.

¿El punto sobre paz tiene relación con el proceso de La Habana?

Queremos saber cómo sería la participación del movimiento social del campo en el proceso. Al inicio de los diálogos pedimos una



César Jerez, vocero de Cumbre Agraria.

participación directa en la mesa, pero el Gobierno nos la negó. Ahora ese no es un punto de la agenda. Creemos que los ocho temas se complementan con lo que se plantea en La Habana y lo del Eln, pero son agendas particulares. Las peticiones de las guerrillas no son para solucionar sus problemas, su enfoque es estructural, se relacionan con la tierra, con la economía y con la participación política.